

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de tutela**

Radicación: **2023-00167**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por **DARIO LAGUADO MONSALVE**, actuando como liquidador designado de los activos de la compañía C.I. DISEÑO Y MODA INTERNACIONAL S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL / Nit: 805.011.316-1 en contra de **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

II. ANTECEDENTES:

El accionante sustenta sus pretensiones en los hechos que se resumen a continuación:

2.1. HECHOS (SÍNTESIS):

1.- Mediante Auto 400-006471 de 4 de mayo de 2022, la Superintendencia de Sociedades decretó la terminación del proceso de Reorganización y la apertura del proceso de Liquidación Judicial de los bienes y haberes de la sociedad C.I. Diseño y Moda Internacional S.A.S. (una comercializadora internacional).

2.- En esa providencia se designó a la doctora Beatriz Gómez Botero como liquidadora, quien fue relevada del cargo el 2 de noviembre de 2022 con auto 400-163000 y en esa misma fecha y mediante esa providencia, fui designado como liquidador en su reemplazo.

3.- A la fecha no he recibido los documentos básicos de la sociedad ni la contabilidad y de ello da cuenta el expediente digital disponible en www.supersociedades.gov.co.

4.- Ante la falta de información, presenté un derecho de petición ante la SIC que se radicó vía correo electrónico el día 2023-01-05 10:34:10 bajo el asunto DERECHO DE PETICION DE AUXILIAR DE JUSTICIA DESIGNADO POR SUPERSOCIEDADES y con número de radicación 23-4351- -00000-0000.

5.- Ante el silencio de esa entidad, hice un apremio el día 2023-02-21 13:08:51 con asunto FALTA RESPUESTA DERECHO DE PETICION. RADICACION 2023-4351 y fue radicado bajo el número 23-4351- -00001-0000.

6.- Han transcurrido más de dos meses y desde el día en que radiqué mi derecho de petición y hasta el momento, no he recibido una respuesta de fondo a mi solicitud, situación que desconoce los términos legales y constitucionales para dar respuesta a esta clase de peticiones.

2.2. PETICIÓN:

1.- Se declare que la SIC ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la concursada.

2.- Se tutele el derecho fundamental de petición que le asiste a la concursada.

3.- Como consecuencia, se ordene a la SIC que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombianas.

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

La acción fue admitida por este estrado judicial el 21 de marzo de 2023, ordenándose realizar las respectivas notificaciones y solicitando contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

3.1. RESPUESTA:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (archivo digital 010): Solicitaron se niegue la acción de tutela, argumentando que:

El Grupo de Trabajo de Gestión Judicial brindó una respuesta el día 22 de marzo de 2023 a través del radicado 23-4351-2, al correo del peticionario dariolaguadoinsolvencia@yahoo.com. Para tal fin, remitimos las certificaciones pertinentes dentro del presente asunto.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a su Despacho tener en cuenta que la entidad dio por satisfecho de manera clara, completa y de fondo el derecho de petición del accionante, y, en consecuencia, declare que en el presente caso existe HECHO SUPERADO DE LA ADMINISTRACIÓN, en la medida en que, como se mencionó anteriormente, ya se ha dado respuesta de fondo a la petición.

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (Archivo digital No. 011) Señalaron que El proceso de Liquidación Judicial regulado en la Ley 1116 de 2006, tiene como objetivo el pago de las acreencias debidamente reconocidas con el patrimonio del liquidador, por lo que en los artículos 48 y siguientes, establecen que es deber del agente liquidador como auxiliar de la justicia, determinar el inventario de bienes para efectos de su aprobación.

En consecuencia, el hecho de que el liquidador mediante su ejercicio del derecho de petición elevado a la Superintendencia de Industria y Comercio tenga como objeto la solicitud de información sobre: patentes, modelos y trazados, signos distintivos, diseños industriales que se encuentren a nombre de la sociedad concursada, indica que está cumpliendo a cabalidad sus funciones, más sin embargo, la falta de respuesta frente a tal solicitud no solo perjudica la gestión del auxiliar de la justicia, sino el de la Superintendencia de Sociedades como Juez del proceso liquidatorio, pues al carecer de dicha información, no se hace posible determinar los bienes que conforman el inventario, y por consiguiente, los acreedores se verían totalmente perjudicados por la mora en los términos judiciales del proceso concursal, además de que sus obligaciones no sean reconocidas ni pagadas de manera pronta.

Así las cosas, debe ampararse el derecho incoado por el agente liquidador, en la medida en que la respuesta esperada permite continuar con el proceso liquidatorio.

IV. CONSIDERACIONES:

4.1 COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2 PROCEDENCIA:

La acción de tutela es un mecanismo de amparo judicial que permite a las personas exigir ante cualquier Juez de la República, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando se presente una violación o amenaza de violación por actos, hechos, omisiones u operaciones de cualquier autoridad pública, o por la acción u omisión de particulares bajo ciertas y determinadas circunstancias que define la Ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario, es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

4.3 DE LOS DERECHOS VULNERADOS

En su escrito de tutela, **DARIO LAGUADO MONSALVE**, actuando como liquidador designado de los activos de la compañía C.I. DISEÑO Y MODA INTERNACIONAL S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL, señala que la entidad accionada la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO le vulnera su derecho fundamental de petición al no contestar de fondo la petición radicada ante dicha entidad.

Como quiera que en este trámite constitucional se reclama la contestación del derecho de petición, el Despacho estima pertinente advertir sobre la protección el derecho fundamental de petición, que ésta comprende los siguientes elementos de acuerdo con lo expuesto por el máximo tribunal constitucional en sentencia T -667 de 2011, los cuales se exponen a continuación:

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes.

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que obliga a la autoridad a quien se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guarden relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado.

(4) Y, el derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta”.

Igualmente, la H. Corte Constitucional en sentencia T-206 de 2018 adocrinó que la “Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y **tener notificación efectiva**” (negrilla y subrayado propio).

Sobre la notificación de la respuesta del derecho de petición la H. Corte Constitucional en Sentencia T-430 de 2017, expuso lo siguiente:

La notificación del peticionario implica la obligación de las autoridades y de los particulares de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo de su solicitud. En efecto, si el peticionario no tiene acceso a la respuesta, puede considerarse que nunca se hizo efectivo el derecho, pues existe la obligación de informar de manera cierta al

interesado sobre la decisión, para que éste pueda ejercer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé en algunos casos o, en su defecto, demandarla ante la jurisdicción competente. En ese sentido, esta Corte en la sentencia C-951 de 2014 indicó que: "el ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición [56], porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente. La notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011" Negrilla y subrayado fuera del texto.

4.4 DEL CASO CONCRETO

Con el anterior panorama jurisprudencial se procede a descender al caso objeto de estudio.

Delanteramente, es claro para este fallador la necesidad de tutelar el derecho de petición de **DARIO LAGUADO MONSALVE**, actuando como liquidador designado de los activos de la compañía C.I. DISEÑO Y MODA INTERNACIONAL S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL, como quiera que la entidad encartada pese haber emitido contestación a la solicitud del accionante la misma carece de las pruebas pertinentes **para poder tener como efectiva la notificación de la respuesta que aparentemente fue emitida al peticionario.**

Procede este estrado judicial a revisar la documentación aportada con el escrito de tutela, así como también las arrimadas con la contestación dada a esta acción por parte de la entidad accionada, encontrando que:

En primer lugar, la entidad accionada comunica en su escrito de contestación a la acción de tutela, que a través de comunicación radicada No. 23-4351- -2 del 22/03/2023, resolvieron la solicitud presentada por **DARIO LAGUADO MONSALVE**, en la que solicitaba que:

"solicito la amable colaboración de esa entidad, para que previo el pago a mi costa de los emolumentos que se requieran, esa entidad me CERTIFIQUE si las siguientes personas son titulares de algunas (i) patentes, modelos y trazados; (ii) signos distintivos; o, (iii) diseños industriales y de los que lleve registro esa entidad en los términos de ley, para luego obtener los certificados que correspondan con información precisa, así:

A.- C.I. DISEÑO Y MODA INTERNACIONAL S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL Nit: 805.011.316-1

B.- LUIS EDUARDO GONZALEZ ZUÑIGA C.C.14961129

C.- NANCY TERESA GONZALEZ DE BARBERI C.C.31258112

D.- GZUNIGA, LTD DOMICILIO NEW YORK

E.- C.I. MAYYA S.A.S. NIT: 901043219

F.- HEISENPORT INC DOMICILIO PANAMÁ

G.- CAPITAL EXPRES Sin información adicional"

En segundo lugar, revisando los anexos que adjunta la accionada, no se pudo evidenciar que exista pruebas que confirme que dicha respuesta fue remitida al correo electrónico del accionante y recibido por él, es decir **no obra acuse de recibido o certificación alguna donde conste que el peticionario recibió de manera efectiva dicha contestación.**

Teniendo en cuenta lo anterior, le corresponde a esta oficina judicial verificar si la contestación emitida a la petición radicada el 5 de enero de 2023 con radicado 23-4351- -00000-0000., por el señor **DARIO LAGUADO MONSALVE**, **se notificó en debida forma y con ello se le garantizó el principio de publicidad al accionante.**

Por lo anterior, podemos observar que respecto a la notificación de dicha contestación, la **misma no fue realizada en debida forma,** por lo que, en este asunto tenemos que

considerar que de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales citados líneas arriba en donde el máximo tribunal constitucional señaló "En efecto, si el peticionario no tiene acceso a la respuesta, puede considerarse que nunca se hizo efectivo el derecho, pues existe la obligación de informar de manera cierta al interesado sobre la decisión, para que éste pueda ejercer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé en algunos casos o, en su defecto, demandarla ante la jurisdicción competente", en el presente asunto se encuentra vigente la vulneración del derecho de petición del señor **DARIO LAGUADO MONSALVE** como quiera que no se probó sumariamente que esta respuesta al derecho de petición fuera recibida por el peticionario.

Por todo lo anteriormente expuesto, se amparará la garantía fundamental de petición del accionante **DARIO LAGUADO MONSALVE**, y, en consecuencia, se ordenará **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de este proveído, proceda a notificar al accionante la comunicación No. 23-4351- -2 del 22/03/2023, haciendo la advertencia que esta deberá ser notificada por los medios establecidos legalmente para ello.

Finalmente, se desvinculará de esta acción a la Superintendencia de Sociedades y se ordenará notificar por el medio más expedito el presente proveído a las partes intervinientes dentro de esta acción de tutela.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN EL NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

RESUELVE:

PRIMERO: ACCEDER para garantizar el derecho fundamental de petición **DARIO LAGUADO MONSALVE**, actuando como liquidador designado de los activos de la compañía C.I. DISEÑO Y MODA INTERNACIONAL S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de este proveído proceda a notificar al accionante la comunicación No. 23-4351- -2 del 22/03/2023, haciendo la advertencia que esta deberá ser notificada por los medios establecidos legalmente para ello.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito.

CUARTO: REMITIR las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada la sentencia dentro del término legal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ